**C. DIP. ALFONSO GUADALUPE RUIZ CHICO**
**PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO**
**P R E S E N T E.**

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, recibimos para efecto de estudio y dictamen, la **iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2013,** presentada por el ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato.

Con fundamento en los artículos 69, 78, 95 fracción XIV y párrafo último; 96 fracción II y párrafo último y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, analizamos la iniciativa referida, presentando a la consideración de la Asamblea el siguiente:

**D i c t a m e n**

Las diputadas y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras analizamos la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.

## I. Antecedentes.

El ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, en la tercera sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2012, aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley de Ingresos para dicho Municipio, para el ejercicio fiscal del año 2013, misma que ingresó en la Secretaría General de este Congreso el pasado 15 de noviembre.

Con lo anterior se dio cumplimiento al artículo 20 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El ayuntamiento acompañó como anexos a la iniciativa, presentada por escrito y en medio digital: Certificación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento, celebrada el 14 de noviembre de 2012; el pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y un anexo técnico correspondiente al proyecto tarifario 2013, con relación a los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales.

En la sesión ordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2012, la presidencia del Congreso dio cuenta a la Asamblea con la iniciativa de mérito, turnándola a estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, siendo radicada en la misma fecha.

Radicada la iniciativa procedimos a su estudio, a fin de rendir el dictamen correspondiente.

## II. Consideraciones.

Como todo acto de autoridad, la emisión de las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2013, no se encuentra ajena a la observancia de las garantías individuales para los particulares como para los propios ayuntamientos iniciantes. A partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, en la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagró a favor de los ayuntamientos del país, la facultad para proponer a las legislaturas de los estados, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Estas reformas establecieron en materia impositiva municipal una potestad tributaria compartida entre los ayuntamientos de la entidad y el Congreso del Estado. Por eso, la potestad tributaria del Congreso del Estado, reservada a éste, de acuerdo al principio de legalidad en materia de las contribuciones, contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, se complementa con los principios de fortalecimiento municipal y de reserva de fuentes y con la facultad expresa de iniciativa de los ayuntamientos. De ahí que, aún cuando este Poder Legislativo sigue conservando la facultad de decisión final sobre las propuestas contenidas en las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios, la Constitución Federal nos obliga a dar el peso suficiente a la facultad del municipio, lo que se concreta con la motivación que se exponga al examinar cada una de las propuestas tributarias del ayuntamiento iniciante.

Por lo tanto, la fundamentación del Congreso del Estado para aprobar la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Gto., se surte cuando se actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Federal y la particular del Estado confiere a este Poder Legislativo, por lo que se desprende que el Congreso del Estado es competente para conocer y analizar la iniciativa objeto del presente dictamen, conforme lo establecido en los artículos 31 fracción IV y 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 fracción II, 63 fracciones II y XV y 121 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.

En cuanto a la motivación del Congreso del Estado para dictar esta Ley, debe afirmarse que respecto de actos legislativos, el requisito de su debida motivación se cumple en la medida en que las leyes que emita el Congreso se refieran a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. En el caso que nos ocupa, las relaciones sociales a regular jurídicamente se derivan del mandato previsto en el artículo 115 fracción IV párrafo cuarto de la Constitución Federal que dispone:

> «Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas.»

Las anteriores consideraciones sustentan desde luego, la fundamentación y motivación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Salamanca, Gto., para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Para ello, además, nos remitimos a lo dispuesto en las siguientes tesis de jurisprudencia, las cuales son aplicables al presente caso:

« No. Registro: 820,139
Jurisprudencia
Materia(s):
Séptima Época
Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice de 1988
Parte I
Tesis: 68
Página: 131

**FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.**
Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.

Séptima Época, Primera Parte:

Vol. 77, Pág. 19. A. R. 6731/68. Lechera Guadalajara, S. A. Unanimidad de 19 votos.
Vol. 78, Pág. 69. A. R. 3812/70. Inmobiliaria Cali, S. A. y Coags. (Acums). Unanimidad de 16 votos.
Vols. 139-144, Pág. 133. A. R. 5983/79. Francisco Breña Garduño y Coags. Unanimidad de 17 votos.
Vols. 157-162, Pág. 150. A. R. 5220/80. Teatro Peón Contreras, S. A. Unanimidad de 15 votos.
Vols. 181-186. A. R. 8993/82. Lucrecia Banda Luna. Unanimidad de 20 votos.
Esta tesis apareció publicada, con el número 36, en el Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pág. 73.

« No. Registro: 192,076
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XI, Abril de 2000
Tesis: P./J. 50/2000
Página: 813

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.**
Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía

aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación.

Controversia constitucional 34/97. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 11 de enero de 2000. Unanimidad de diez votos. Impedimento legal: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Mara Gómez Pérez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 50/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.»

### II.1. Metodología para el análisis de la iniciativa.

Las comisiones dictaminadoras acordamos como metodología de trabajo para la discusión de la totalidad de las iniciativas de leyes de ingresos municipales, la siguiente:

**a)** Se calendarizaron las reuniones de trabajo de estas comisiones dictaminadoras, con la finalidad de atender con toda oportunidad, pero con la diligencia debida cada expediente.

**b)** Se acordó retomar los criterios generales recopilados del análisis de las iniciativas de leyes de ingresos municipales del ejercicio fiscal 2012, los que fueron enriqueciéndose durante el trabajo de estas Comisiones. Dichos criterios generales deben observarse en acatamiento estricto a los principios constitucionales y legales vigentes.

Dentro de dichos criterios generales acordamos considerar el índice inflacionario al 5%, atendiendo a la información proporcionada por el Banco de México, como estimado al cierre anual para el año de 2012, a efecto de establecer dicho porcentaje como parámetro para autorizar incrementos en las cuotas y tarifas en las leyes de ingresos para el próximo ejercicio fiscal. En tal sentido, analizamos la justificación técnica en todas aquellas propuestas cuyos incrementos superaran el porcentaje inflacionario referido, en el entendido de que de no existir ésta, se ajustarían al tope inflacionario estimado.

También en dichos criterios generales incluimos diversas modificaciones conceptuales, principalmente en materia de derechos de obra pública, desarrollo urbano y fraccionamientos, derivadas de las nuevas disposiciones previstas en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 154, segunda parte, de fecha 25 de septiembre de 2012.

**c)** Estas Comisiones Unidas nos ajustamos para la discusión y votación del proyecto de dictamen a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

**II.2. Elaboración y valoración de los estudios técnicos de las contribuciones.**

Como parte de la metodología, se solicitó a la Dirección General de Apoyo Parlamentario y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior y de la Comisión Estatal del Agua, la presentación de cuatro estudios por cada iniciativa de ley, en los siguientes aspectos:

**a)** **Socioeconómico:** Se realizó un diagnóstico sobre las finanzas municipales del año anterior y el corte a la última cuenta pública presentada, detallando la eficiencia de la recaudación por las principales contribuciones. Además, se informó sobre la capacidad financiera del municipio, su población, viviendas, tasa de desempleo, ingreso per cápita, entre otros indicadores que se valoran en la toma de decisiones.

**b)** **Cuantitativo:** Se realizó un estudio cuantitativo de las tasas, tarifas y cuotas del presente año y la propuesta 2013, identificándose con precisión las variaciones porcentuales.

**d)** **Predial:** Se realizó un estudio comparado de tasas, valores de suelo, construcción, rústicos y menores a una hectárea, con el fin de dar un trato pormenorizado a esta fuente principal de financiamiento fiscal del municipio, amén de la revisión escrupulosa de los estudios técnicos presentados como soporte a las modificaciones cuantitativas y estructurales de esta importante contribución.

**e)** **Agua potable:** Se realizó un estudio técnico integral sobre el particular, los aspectos jurídicos, hacendarios, administrativos, entre otros, los que se detallaron con precisión bajo dos vertientes: La importancia de la sustentabilidad del servicio en la sociedad sin impacto considerable, y la solidez gradual de la hacienda pública.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos que, con la finalidad de cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad legislativa, el iniciante debe conocer los razonamientos que nos motivaron para apoyar o no sus pretensiones tributarias, razón por la cual, cuando el dictamen no se refiera específicamente a las propuestas que fueron acogidas íntegramente por las Comisiones Unidas, debe entenderse que los planteamientos del iniciante que las motivaron fueron suficientes para aprobarlas, eximiéndose así la necesidad de fundamentar explícitamente tal aprobación. En cambio, este dictamen se ocupará de argumentar las razones que sirvieron de base

para no aprobar aquellos conceptos propuestos por el iniciante o bien para la modificación o ajuste de aquéllos que no fueron aprobados en su integridad.

Para ello, partimos de un primer criterio general consistente en no aprobar incrementos o variaciones en los esquemas tributarios que no estuviesen soportados en los estudios o elementos técnicos necesarios y exigibles a los ayuntamientos, que fundamentaran tales aumentos o modificaciones, ya que ante la ausencia de argumentos técnicos, estas Comisiones Unidas debimos desestimarlas. Asimismo, cabe señalar que en las decisiones que se tomaron, las Comisiones Unidas valoramos los estudios técnicos y criterios mencionados.

Para reforzar los argumentos antes mencionados se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial:

«Registro Núm. 174089. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Octubre de 2006. Página: 1131. Tesis: P./J. 112/2006. Jurisprudencia. Materia (s): Constitucional.

**HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.** El precepto constitucional citado divide las atribuciones entre los Municipios y los Estados en cuanto al proceso de fijación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, pues mientras aquéllos tienen la competencia constitucional para proponerlos, las Legislaturas Estatales la tienen para tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien, conforme a la tesis P./J. 124/2004, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de 2004, página 1123, con el rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CÁLCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERÁN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.", las Legislaturas Estatales sólo podrán apartarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva y razonable. En ese sentido, se concluye que al igual que en el supuesto de los impuestos abordado en el precedente referido, la propuesta del Municipio respecto de las cuotas y tarifas aplicables a derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sólo puede modificarse por la Legislatura Estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable.

Controversia constitucional 15/2006. Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo. 26 de junio de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, el diez de octubre en curso, aprobó, con el número 112/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil seis.»

### II.3. Consideraciones generales.

El trabajo de análisis se guió buscando respetar los principios de las contribuciones contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que consagra los principios constitucionales tributarios de: reserva de ley, destino al gasto público, y de proporcionalidad y equidad; los cuales además de ser garantías individuales, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental.

### II.4. Consideraciones particulares.

Del análisis de la iniciativa, determinamos que el ayuntamiento iniciante en términos generales propone incrementos del 5% a las tarifas y cuotas, con respecto a las aplicables para el ejercicio fiscal 2012; únicamente en el caso de los apartados correspondientes a los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales, se proponen incrementos del 4%.

Al respecto, cabe mencionar que nuestro máximo Tribunal constitucional ha establecido en varias jurisprudencias, que las contribuciones pueden ser susceptibles de actualización en razón de la depreciación que sufren los insumos que se requieren para operarlas, pero única y exclusivamente son receptoras de tal actualización las tarifas y cuotas, no así las tasas, ya que estas últimas operan sobre una base gravable que sí resiente la depreciación.

En este sentido, la propia Suprema Corte ha definido que para actualizar las tarifas y cuotas es constitucional acudir al factor inflacionario que ofrece el Banco de México, por lo que, con estas razones resulta procedente en lo general la propuesta.

**De la naturaleza y objeto de la ley.**

En el artículo 1, se suprimió en su primer párrafo, el concepto de interés social, toda vez que la Ley de Ingresos es de interés general y no está dirigida a un sector con condiciones especiales.

Asimismo, por certeza jurídica se omitió en el último párrafo de dicho artículo, la referencia «entre otras».

**De los impuestos.**

**Impuesto predial.**

El iniciante no propone incrementos a las tasas.

Cabe señalar que en este apartado se advirtió la existencia de una tasa diferenciada respecto de los inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones, de aquéllos sin edificaciones. Al respecto realizamos las siguientes consideraciones:

**Tasa diferenciada para inmuebles sin construcción.** Se precisa que la existencia de una tasa diferenciada respecto de los inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones, de aquellos sin edificaciones, tiene un fin extrafiscal, consistente en desalentar la especulación inmobiliaria y con ello coadyuvar a la preservación del ambiente, la protección de la salud pública y al establecimiento de condiciones que ayuden a disminuir los índices de inseguridad en el municipio, pues la proliferación de inmuebles baldíos genera en algunos casos condiciones propicias para el refugio de delincuentes, aunado a que en muchas ocasiones los propietarios de inmuebles sin construcción únicamente se benefician con la actividad que desarrolla la administración pública al acercar los servicios públicos a sus predios, aumentando con ello su plusvalía, sin que los propietarios inviertan cantidad alguna.

De modo que al existir un fin extrafiscal, atentos a lo dispuesto en las tesis 1a. VI/2001 y 1a. V/2001, ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XIII, de marzo de 2001, páginas 103 y 102, respectivamente, bajo los rubros: **CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS MISMAS,** y **CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS MEDIOS DE DEFENSA PARA DESVIRTUARLOS,** es válido que se establezca una diferenciación en tratándose de las tasas para inmuebles urbanos y suburbanos sin edificación, pues si bien el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público, se le puede agregar otro de similar naturaleza, como lo es el fin extrafiscal argumentado y justificado, además que se contempla el medio de defensa que permite al causante desvirtuar la hipótesis impositiva, en caso de considerar que no se ajusta a los extremos del dispositivo normativo.

En el artículo 5, fracción II, inciso a), por lo que hace a los elementos agrológicos para la valuación, el iniciante proponía incrementar los factores aplicables a dichos elementos. Al respecto, conforme a los criterios generales adoptados por estas Comisiones Unidas y como ya se había apuntado anteriormente, solamente las tarifas y cuotas aplicables a las contribuciones pueden ser susceptibles de actualización

con base en el índice inflacionario, no así las tasas o factores. Por tal motivo se conservaron los factores vigentes.

También en el artículo 5, fracción II, inciso b), que establece la tabla de valores aplicables a inmuebles menores de una hectárea no dedicados a la agricultura, en el numeral 4, correspondiente a inmuebles en rancherías sobre calles trazadas con todos los servicios, en congruencia con los incrementos propuestos por el iniciante en este inciso, se ajustó la cuota al 5% de incremento respecto a la Ley vigente, atendiendo a lo que se establece en la exposición de motivos de la iniciativa, al señalar que en materia de impuesto predial se propone un incremento del 5% para el 2013.

**Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos.**

En el artículo 12, se ajustó su contenido para que en esta Ley únicamente se establezca la tasa aplicable al impuesto, que es el elemento de la contribución que debe preverse en la misma y no reiterar la base que ya se prevé en el artículo 215 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.

**De los Derechos.**

Las propuestas y ajustes realizados en este Capítulo se enumeran de acuerdo al orden en que es expuesto cada uno de los conceptos en la iniciativa, bajo el criterio de que aquellos derechos a los que no se hace referencia específica en este apartado, no sufren modificaciones o en su caso, éstas consistieron en aplicarles como límite de actualización el índice inflacionario en aquellos conceptos que no fueron justificados o que arguyendo las razones para dichos incrementos, los argumentos expuestos por los iniciantes no se consideraron procedentes.

En este apartado se proponen incrementos en el orden del 4% y 5% a las tarifas y cuotas, considerando procedente la pretensión del ayuntamiento iniciante.

**Por servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales.**

Con respecto a estos derechos en términos generales el iniciante presenta el mismo esquema de cobro en las tarifas y cuotas, proponiendo incrementos en el orden del 4% respecto a la Ley vigente, por lo que en términos generales consideramos procedentes las propuestas contenidas en la iniciativa.

No obstante lo anterior, en este apartado modificamos la denominación de los servicios que se prestan, omitiendo el concepto de alcantarillado, en atención a que el servicio que se presta y que se está regulando es el de drenaje. En consecuencia, se modificó la denominación de las secciones primera y segunda del Capítulo Cuarto, los encabezados de los artículos 14 y 15 y sus fracciones III; la denominación de las

secciones segunda y tercera del Capítulo Décimo y los encabezados de los artículos 47 y 48, así como todas aquellas referencias que aludían al servicio de alcantarillado.

En las fracciones I, inciso e) y II, inciso f) del artículo 14; así como en las fracciones I, inciso c) y II, inciso d) del artículo 15, correspondientes a las cuotas aplicables al servicio medido y a las cuotas fijas de agua potable, en el caso del uso comercial, se precisó la denominación del concepto, para quedar «uso comercial y de servicios», en congruencia con lo establecido en los artículos 312, fracción III y 330 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establece que entre los usos que comprende la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales está el comercial y de servicios, definiéndolo como la utilización del agua en establecimientos y oficinas, dedicadas a la compra y venta de bienes y servicios. Bajo los mismos argumentos se adecuaron las fracciones XIV de los referidos artículos 14 y 15, así como todas aquellas disposiciones que hacían referencia al uso comercial.

En la fracción I inciso h) del artículo 14, el iniciante proponía modificar el esquema de cobro del servicio de agua potable a las escuelas públicas, disminuyendo los metros cúbicos de asignación mensual gratuita de agua. No obstante lo anterior, determinamos improcedente la propuesta, ya que aún cuando se anexó un estudio técnico para sustentar la propuesta el mismo es insuficiente para determinar el impacto que generaría disminuir la asignación gratuita que se prevé actualmente. En consecuencia, se conservó el esquema previsto en la Ley vigente, reiterando la necesidad de que se establezcan en dichas instituciones públicas, medidas contundentes que contribuyan al uso racional del agua, estableciendo programas y acciones efectivas entre sus alumnos y el personal que labora en ellas.

Asimismo, en la fracción II del artículo 14, correspondiente al servicio de agua potable a cuota fija, reinsertamos el párrafo previsto en la Ley vigente que establece que para el cobro de servicios a tomas de instituciones públicas se les aplicarán las cuotas contenidas en dicha fracción, de acuerdo al giro que corresponda a la actividad ahí realizada; y que las escuelas públicas pagarán el 50% de dichas cuotas. Lo anterior, ante la falta de justificación por parte del iniciante y al no contar con la certeza de que la totalidad dichas instituciones públicas cuenten con el sistema de micromedición.

Respecto a la fracciones III, inciso e); XII, primer párrafo e incisos e), f), g) e i); y XIII, inciso c) de la iniciativa, se consideró pertinente la supresión de dichos incisos, ya que se desprende claramente que su enunciado no contiene ninguno de los elementos esenciales de la contribución llamada derecho, considerando que no imponen ni describen alguna obligación tributaria, pues no contienen sujeto, objeto, base, cuota o tarifa. Los enunciados de dichos párrafos tampoco son de tipo normativo, pues no contienen una prohibición, mandato o permisión alguna; son simplemente enunciados carentes de contenido normativo que expresan una información, pero que de manera alguna, imponen una carga tributaria a los

particulares. Sin embargo, dichos preceptos podrá establecerlos el ayuntamiento en el reglamento o disposiciones administrativas respectivas.

En la fracción XII, inciso a) de la iniciativa, se simplificó su redacción, considerando que era repetitiva con lo que se establecía en el primer párrafo de dicha fracción.

En el inciso a) de la fracción XIV del artículo 14, correspondiente a incorporación a las redes de agua potable y descarga de drenaje a desarrollos o unidades inmobiliarias de giros comerciales y de servicios e industriales, se detectó un error en la iniciativa, al haber propuesto un costo para el servicio de drenaje de $13,873.19, siendo el correcto $135, 873.19, razón por la que se ajustó dicha cifra.

En el artículo 15, correspondiente a los derechos por los servicios públicos de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición que presta el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de la Comunidad de Valtierrilla, en la fracción I, ajustamos el número de metros cúbicos que da derecho a consumir la cuota base que es de 13, ya que por error el iniciante estableció la cantidad 15 $m^3$.

En la fracción II del artículo 15, el iniciante proponía suprimir el cobro del 50% de los consumos de agua potable a las escuelas públicas, el cual será aplicable sobre la tarifa pública o mixta, previsto en la Ley vigente. No obstante lo anterior y ante la falta de justificación por parte del iniciante para omitir dicho beneficio, estas Comisiones Unidas acordamos conservar el esquema vigente. Pronunciándonos sobre la necesidad de establecer en las escuelas públicas, medidas contundentes que contribuyan al uso racional del agua, estableciendo programas y acciones efectivas entre sus alumnos y el personal que labora en ellas.

**Por servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.**

En el artículo 16, fracciones I y II, el iniciante proponía modificar los conceptos de cobro previstos en las mismas, argumentando al respecto que se proponía añadir al inicio de ambas fracciones la palabra «Por disposición», con la finalidad de evitar confusiones por parte de los contribuyentes y determinar de manera concreta el servicio por el cual se va a cobrar.

No obstante los argumentos vertidos por el iniciante, éstos se consideraron insuficientes para proceder a la modificación de los conceptos de cobro, considerando que las cuotas incluyen la prestación de la totalidad los servicios que son: limpia, recolección, traslado y depósito de residuos y no únicamente el concepto de disposición en el relleno sanitario. En consecuencia, las fracciones I y II se conservaron en los términos previstos en la Ley vigente.

Asimismo, se suprimió el contenido del último párrafo del artículo 16, que aún cuando ya se preveía en la Ley vigente, se trataba solamente de un enunciado carente de contenido normativo que no imponía una carga tributaria a los particulares. Sin embargo, dicho precepto podrá establecerlo el ayuntamiento en el reglamento o disposiciones administrativas respectivas.

**Por servicios de obra pública y desarrollo urbano.**

Con respecto a esta sección, en el artículo 25, se realizaron diversos modificaciones a los conceptos de cobro señalados en las fracciones I, II, III, V, IX y X y último párrafo de la iniciativa, de conformidad con lo que establecen los artículos 253, 255, 256, 263, 371 y 374 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

También se omitió el contenido de la fracción IV que establecía el concepto de licencia de demolición, en atención a que dicho concepto encuadraría en el de permiso de construcción previsto en el citado Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

De igual manera se suprimió el concepto que se proponía en la iniciativa en la fracción VIII, correspondiente al análisis preliminar de uso de suelo y factibilidad de usos del predio, que aún cuando era vigente no tenía sustento en algún ordenamiento legal para su cobro.

Respecto a la fracción VII de la iniciativa, correspondiente al concepto de factibilidad para dividir, lotificar o fusionar, ésta no se incluyó en la Ley, en atención a que en los términos del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, este concepto formaría parte del permiso de división que ya se prevé en la fracción XII del artículo 25 de la presente Ley, al ya no considerarse la lotificación y la fusión. Por lo que si permanecieran ambas fracciones estaríamos ante un doble cobro. En atención también a dichas consideraciones se omitió el concepto de permiso de lotificación.

En el caso de la fracción XVII, prevista en el artículo 25 de la iniciativa, que establece el concepto de dictamen para la constitución de propiedad de régimen de condominio, en atención a la naturaleza del servicio que se presta, se reubicó como fracción VI del artículo 27, correspondiente a los derechos por servicios en materia de fraccionamientos y desarrollos en condominio, únicamente efectuando algunas precisiones en su redacción.

El iniciante proponía establecer nuevos conceptos en la fracción I, correspondiente a los permisos de construcción para uso especializado para industria ligera, industria media, industria pesada, instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica, excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro y tapiales, argumentando que

sustentaba su propuesta en lo establecido en el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo para el municipio de Salamanca, Guanajuato y en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Salamanca, que establecen estos tipos de construcciones o ampliaciones de uso especializado, las cuales se están llevando a cabo y no estaban contemplados estos conceptos y sus tarifas en la Ley de Ingresos, no pudiéndose emitir la licencia correspondiente, por lo que no se podía efectuar la recaudación. Sin embargo, no obstante lo argumentado en la exposición de motivos, de conformidad con los criterios generales aprobados por estas Comisiones Unidas, al no haberse remitido por el iniciante los estudios técnicos para sustentar los cobros propuestos, no se incluyeron en la Ley, por no contar con los elementos indispensables que nos permitan determinar el costo que le representa a la administración municipal la prestación de dichos servicios.

Finalmente, ajustamos la cuota de la tarifa máxima aplicable al permiso de uso de suelo, previsto en la fracción VI del decreto contenido en el presente dictamen en congruencia con los incrementos propuestos en esta sección, que son del 5%, como lo refiere el iniciante en la exposición de motivos.

**Por servicios en materia de fraccionamientos.**

En esta sección se ajustó su denominación para quedar: «Por servicios en materia de fraccionamientos y desarrollos en condominio», para que fuera acorde con los servicios que se prestan, de conformidad con lo dispuesto por el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En consecuencia, también se realizaron ajustes a los conceptos de cobro previstos en el artículo 27, fracciones II, III y IV, inciso a) de la iniciativa. Por la misma razón se omitió el contenido de la fracción V de la iniciativa, que establecía el cobro de los derechos por concepto de autorización del fraccionamiento.

**Por expedición de licencias o permisos para el establecimiento de anuncios.**

En esta sección solamente adecuamos su denominación, en los términos del Capítulo Segundo del Título Quinto de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; así como el concepto de cobro previsto en la fracción I del artículo 28.

**Por servicios de asistencia y salud pública.**

En el artículo 33, de conformidad con los criterios generales, ajustamos la cuota mensual aplicable al CADI Valtierrilla, prevista en la fracción XIII al 5% respecto a la Ley vigente, al no justificarse por el iniciante el incremento propuesto.

**Facilidades administrativas y estímulos fiscales.**

En la sección correspondiente a los incentivos por los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales prestados por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto., en la fracción I del artículo 47, retomamos el descuento previsto en la Ley vigente del 15% a los usuarios del servicio de agua potable que se encuentran en el supuesto de cuota fija y que paguen por adelantado su servicio anual durante el primer bimestre, por tratarse de un beneficio para los usuarios de dichos servicios.

Por otra parte, en la fracción II, el iniciante proponía modificar el descuento aplicable a pensionados, jubilados, personas discapacitadas y de la tercera edad, para establecerlo en 30%, únicamente sobre los primeros trece metros cúbicos de consumo. No obstante lo anterior, y en beneficio de dichos grupos sociales que se encuentran en situaciones vulnerables, determinamos conservar el esquema vigente del 20% de descuento, independientemente de los metros cúbicos consumidos.

En la fracción V del artículo 47, contenida en el presente dictamen también realizamos algunos ajustes para ampliar el número de beneficiarios del descuento previsto en dicha fracción, a fin de que no operara únicamente para la zona urbana, sino que también se aplique en la zona rural donde se preste el servicio. En el caso de la fracción VII, solamente se realizaron algunas precisiones en su redacción, a fin de que el descuento previsto en la misma no fuera discrecional.

Asimismo, en el citado artículo 47 conservamos la disposición prevista en la Ley vigente que refiere que los descuentos previstos por pago anualizado, así como aplicables a pensionados, jubilados, personas discapacitadas y de la tercera edad, no se harán extensivos a recargos y honorarios de cobranza, ni se aplicarán para servicios comerciales, industriales o de carácter diferente al doméstico, al no justificarse por el iniciante su exclusión.

En la sección correspondiente a los incentivos por los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales prestados por el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comunidad de Valtierrilla, en el artículo 48, se omitió el contenido de la fracción II, propuesta en la iniciativa que establecía «Para las tarifas indicadas en el artículo 15, segunda sección, parte II, incisos a), b) y c), de tarifas doméstica, adultos mayores, lote baldío y casa deshabitada respectivamente, no aplicara el descuento por pago adelantado, debido a que estas tarifas fijas son mínimas». Lo anterior, en razón de que las tarifas citadas en el mismo no tienen coincidencia con lo establecido en la fracción II del artículo 15 de la Ley.

Por otra parte, en el artículo 49, que establece una cuota preferencial para los trabajadores de la administración pública municipal, por concepto de pensión para automóviles o camionetas en el estacionamiento subterráneo Hidalgo, en la iniciativa se proponía que dicha facilidad quedara a discreción de la administración municipal, sin emitirse argumento alguno por parte del iniciante. Al respecto debemos señalar que por certeza jurídica dicha propuesta no se incluyó en la Ley, al ser de carácter discrecional.

**Medios de defensa aplicables al impuesto predial.**

Como se argumentó ya en el apartado relativo al impuesto predial, se mantiene este Capítulo que encuentra sustento en la interpretación jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal, que considera respecto a los medios de defensa, que se deben establecer para que el causante pueda desvirtuar la hipótesis impositiva, que en contribuciones tales como el impuesto predial, tienen como finalidad el dar oportunidad para que el sujeto pasivo del tributo, exponga las razones del porqué su predio se encuentra en determinadas circunstancias en relación con la construcción.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de la Asamblea, el siguiente: